

Del fraude perfecto a la "victoria" imperfecta



ARIANA CUBILLOS

Una nueva elección y el panorama político, económico y social lejos de mejorar, empeora. El Gobierno está empeinado en mantenerse en el poder, sin importar el costo que ello implique. La crisis que vivimos no tiene precedentes

El país llegó al 20 de mayo, día elegido para que se realizaran las elecciones presidenciales. Todo el ambiente previo a esta fecha fue atípico para lo que significa una elección de este calibre, especialmente en un contexto tan frágil y polémico como el que estamos viviendo donde se esperaría que, a través de esta elección, se pudiesen dar pasos contundentes para superar la crisis.

No obstante, el proceso y el ambiente se sirvió para que pareciera todo menos una elección tan crucial. El Gobierno venezolano jugó astutamente inhabilitando a los candidatos opositores más representativos, además, logró desarticular a la Mesa de la Unidad (MUD) desde dentro al potenciar entre los diversos partidos diferencias que

hicieron mella en conseguir una sólida propuesta unitaria que pudiese enfrentar a Maduro.

Por su parte, fue Henri Falcón, ex gobernador del estado Lara y abiertamente opositor, pero con un discurso carente de un programa de gobierno convincente, quien se autoproclamó líder y representante de una alternativa al Gobierno de Maduro, pero quien no terminó ni de aglutinar a la oposición ni de convencer al electorado.

Por su parte, Maduro no solo desarticuló a la oposición, sino que logró generar desconfianza en la población sobre el sistema electoral, permitiendo que las dudas arreciaran, logrando que esta se desmovilizara.

El día de la elección se hicieron evidentes las falencias del sistema electoral montado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). En este sentido, se denunció y se hizo público la inasistencia de miembros de mesa, así como la falta de testigos y la poca afluencia de votantes en los centros electorales.

Además, la presencia de los llamados *puntos rojos* cerca de los centros, irrespetaron la norma de que estos debían estar a una distancia mínima de 200 metros del centro electoral. Dichos *puntos rojos* fueron la expresión de una práctica del Gobierno por obtener votos favorables utilizando la manipulación y el chantaje al electorado. Allí le solicitaban el *carnet de la patria* a las personas para ser escaneado y recibir, luego de vo-

tar, un “premio” o al menos no perder los beneficios que se pudiesen conseguir a través de él.

Para los grupos opositores la instalación de esos puntos supuso una política reiterada por parte del Gobierno que da cuenta del ventajismo, la utilización de fondos públicos y programas sociales para su beneficio y la compra de conciencia de una población que está severamente afectada por la crisis económica y de alimentación.

Las reiteradas irregularidades durante el proceso llevaron al candidato Henri Falcón a desconocer “este proceso electoral como válido, como cierto, como realizado. Para nosotros no hubo elecciones...”, por lo que llamó a que “hay que hacer nuevas elecciones en Venezuela”.

Para Falcón, estos comicios estuvieron “plagados de abusos” y dijo que fueron procesadas 91 mil 732 denuncias de testigos a los que no se les permitió el acceso a los centros de votación y la instalación de 13 mil *puntos rojos* en las inmediaciones de los colegios que sirvieron como centros.

Por su parte, para Javier Bertucci, también candidato, la presencia de los *puntos rojos* y la presión que desde allí se le hacía a la población, le llevan a considerar que esas elecciones no fueron un acto democrático.

Luego de toda la jornada electoral, la presidente del CNE, Tibisay Lucena, proclamó sin sorpresas la victoria de Nicolás como presidente con el 92,6 % de las actas escrutadas, una participación de 46,01 % y una proyección del 48 %.

Según Lucena, Maduro obtuvo 5 millones 823 mil 728 votos (67,7 % de los votos totalizados); Henri Falcón, 1 millón 820 mil 552 votos (21,2 %) y Javier Bertucci, 925 mil 042 votos. El resultado otorgó a Maduro 47 puntos de ventaja sobre Falcón.

Ahora bien, el dato que más resaltó fue la escasa participación popular, sobre todo al tratarse de una elección presidencial. Si se consideran por ver-

daderos los resultados ofrecidos por el CNE, hubo un 54 % de abstención, una cifra nada irrelevante si se estima que el promedio de participación en las últimas tres elecciones presidenciales fue superior al 70 %.

Si bien Maduro obtuvo la victoria con el 68 % de los votos, realmente solo alcanzó un 29 % de todo el padrón electoral, obteniendo así una “victoria” imperfecta.

Para el grupo de la oposición aglutinado bajo el llamado Frente Amplio “no hubo elección en Venezuela, hoy no hubo un proceso electoral transparente y libre”, incluso dudan de las cifras dadas por el CNE, ya que estas “no tienen nada que ver con lo sucedido”. En sus declaraciones exigieron realizar unas nuevas elecciones y llamaron a construir una “nueva unidad”.

MÁS SANCIONES

El Gobierno de los EE.UU. impuso nuevas sanciones a funcionarios del Gobierno venezolano. En esta oportunidad, y a pocos días de celebrarse las elecciones presidenciales se incluyó en la lista a Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), por estar involucrado en una extensa y poderosa red de lavado de dinero, corrupción y narcotráfico; a su esposa, la ministra de Turismo, Marleny Josefina Contreras Hernández; a José David Cabello, superintendente de la agencia aduanera y tributaria de Venezuela (Seniat) y a Rafael Alfredo Sarria Díaz, compañero de Cabello en la Academia Militar, a quien identifican como su testaferro desde 2010 en los negocios ilícitos de los que presuntamente participa.

Poco después de conocerse las sanciones, Diosdado Cabello expresó sentirse “...liberado, que el imperialismo se ocupe de perseguir a este humilde soldado y a su familia, me fortalece, me obliga cada día a seguir

luchando por las causas que creo y a serle fiel y leal a nuestro querido Pueblo...”.

LA INTERVENCIÓN DE BANESCO

El 3 de mayo el Gobierno nacional anunció a través de la Vicepresidencia Sectorial de Economía la intervención de Banesco, Banco Universal, por noventa días consecutivos.

De acuerdo a lo comunicado, la intervención se debe a una serie de “irregularidades detectadas que incurren en delitos tipificados por nuestras leyes, en especial graves y notorias faltas a sus obligaciones de prevención de legitimación de capitales”.

Según el Gobierno, Banesco ha omitido o actuado como cómplice en una serie de acciones promovidas por diversos clientes a los cuales se les acusa de promover un sistema paralelo de envíos de remesas a Venezuela, desde varios países de Centro y Sudamérica.

Por su parte, Juan Carlos Escotet, presidente y fundador del banco, emitió un comunicado en el que aseguró que “no hay razones financieras que justifiquen la intervención administrativa ni por un día, mucho menos por 90 días”, por ello “lo clave es entender que el problema en curso, no es ni originado ni promovido por Banesco, ni



AFP

por institución alguna del sistema financiero. El problema es la escasez de papel moneda, asociado a un mercado que intenta proteger sus bienes adquiriendo dólares, que es el bien más apetecido por millones de ciudadanos...”.

MOTÍN EN EL SEBIN

Se produjo un motín entre los reclusos que se encuentran en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ubicado en el emblemático edificio El Helicoide en Caracas.

De acuerdo con las informaciones que se tienen, que vale decir no son absolutamente claras y generan más dudas que certezas, se produjo una riña entre el grupo de presos comunes y los presos políticos, ya que los primeros consideran que los presos políticos tienen mejores condiciones y beneficios.

La riña ocasionó la agresión del dirigente estudiantil, y también preso político, Gregory Sanabria y la intervención de sus compañeros, quienes mediaron para calmar la situación y aprovechar el suceso para canalizar las diferencias y llegar a entablar un punto común desde donde lograron plantear diversas exigencias a las autoridades.

En un hecho inédito y aún confuso, el grupo de presos políticos tuvo acceso a teléfonos celulares desde donde tomaron videos e imágenes de lo que estaba sucediendo dentro del Helicoide, sorteando, sin tener claridad de cómo lo hicieron, el férreo control de la policía política y logrando que las imágenes llegaran hasta las redes sociales y se propagaran rápidamente.

Pero, además, ese mismo grupo de presos, entre los que se encontraba el ex alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, el dirigente estudiantil Lorent Saleh y Josh Holt, estadounidense y misionero mormón acusado de ser espía del Gobierno americano, sostuvo una entrevista con el periodista Fer-



EFE

nando del Rincón de la cadena CNN en español.

Estos manifestaron que lograron hacerse con el control pacífico de las instalaciones de la cárcel y denunciaban las torturas a las que son sometidos, la presencia de presos que no han sido procesados, así como de presos con boletas de excarcelación y de menores de edad y enfermos. Además, exigieron la liberación de todos los presos políticos y la intervención de Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

La situación en el Helicoide se normalizó tras las negociaciones con la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, quienes permitieron el traslado de decenas de presos comunes hacia otras cárceles, así como la liberación de tres menores de edad que habían sido apresados por motivos políticos y otro que fue trasladado a un retén de menores debido a que su boleta de excarcelación “se perdió”.

KELLOGG'S TIRA LA TOALLA

La empresa estadounidense Kellogg's, conocida por la fabricación de cereales y barras nutricionales, que operaba en Venezuela desde hacía más de cien años, con una planta ubicada en la ciudad de Maracay desde 1961, cerró intempestiva-

mente sus operaciones en el país debido al deterioro de la situación económica, la cual generaba dificultades y serias restricciones para acceder a la materia prima.

El cierre deja no solo a más de quinientos trabajadores sin empleo, sino también un mercado en el cual la empresa producía el 75 % de los cereales que se consumían en el país.

Ese mismo día, el gobernador de Aragua, Rodolfo Marco Torres, anunció el “reinicio” de las operaciones en la planta luego que sus dueños decidieran “abandonar a los trabajadores”. En un acto mediático el gobernador aparece dentro de la planta recibiendo de la maquinaria la primera caja de “Kellogg's revolucionaria”.

Se estima que en los cinco años que lleva Nicolás Maduro en la presidencia se han ido del país ocho trasnacionales, afectando directamente la oferta de productos y la generación de empleos. De este grupo de empresas, unas tres fueron tomadas por el Gobierno con la promesa de reactivar su producción, algo que evidentemente no ha sucedido.